



sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. Desde mi punto de vista, esto no significa en absoluto que pueda procederse a una confinación no voluntaria de una persona sin intervención judicial alguna (según lo que dictamina el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sería cuando menos conveniente exigir mayor concreción a disposiciones tan sumamente limitadoras de los

derechos fundamentales. Lo curioso en todo caso es que, más de treinta años después, no hemos avanzado mucho en ese sentido. Como bien ha señalado recientemente Ricardo de Lorenzo, poco ha aportado al respecto la relativamente reciente Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que deja demasiados aspectos abiertos. Sin ir más lejos, por ejemplo, la cuestión de quién habrá de afrontar los gastos derivados de la adopción de las medidas cautelares citadas en su artículo 54.3. →



[Leer más](#)

ES DE OTRO LADO PERTINENTE TENER PRESENTE QUE NUESTRA NORMATIVA SOBRE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TAMPOCO FACILITA DEMASIADO LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS